
Desafíos de nuestra realidad a una teología honesta

—LECCION INAUGURAL DEL AÑO ACADEMICO 1987—

Francisco de Roux, S.J.*

Introducción

Agradecido por esta invitación a hacer la *Lectio Inauguralis* de la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana, quiero sencillamente presentar ante ustedes mis preocupaciones más profundas ante la situación de nuestro país.

Desigualdad social, problema a la vez ético político y técnico, y el vacío de estado y comunidad civil, llenados por todas partes por la mafia, están en el primer plano. La incapacidad de la clase política para adelantar los cambios que el país requiere, el totalitarismo militar de derecha e izquierda y la inexistencia de una ética civil, aparecen en un

plano más profundo. Y todas estas cosas, desde profundidades históricas e internacionales, se entrecruzan, se refuerzan y se agravan mutuamente.

Cualquiera de estos asuntos puede tomarse como hilo conductor para ir tejiendo el propósito de mi intervención que no es otro que contribuir, con preguntas y problemas, al trabajo interdisciplinario que la Teología y las Ciencias Sociales tienen que enfrentar en las condiciones de nuestra sociedad.

Voy a tomar como hilo conductor la ausencia de paz o, lo que es lo mismo, el enfrentamiento entre ejército y guerrillas, los secuestros

* Científico Social. Director del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, Bogotá.

y los chantajes, el accionar de grupos paramilitares, las desapariciones, los asaltos a puestos de policía, los atentados contra el petróleo y la minería, la limpieza nocturna de las ciudades hecha por gentes que han resuelto aplicar justicia por propia iniciativa, los crímenes contra periodistas, jueces, ministros, senadores y representantes y tantos otros hechos que nosotros consumimos día a día en la televisión, la radio y los periódicos, que se nos han vuelto una rutina tan espantosa como normal, y a la que aplicamos el término genérico de violencia.

Y quiero tomar este camino porque es cierto que el pueblo colombiano comparte con los pueblos del sur del mundo condiciones de dominación externa e interna en el campo cultural, económico y político. Pero a más de eso la sociedad colombiana está abrumada por el dolor y el peso de la violencia en una magnitud que no se ha conocido ni siquiera en pueblos más pobres e igual o más profundamente asediados por la injusticia y por la desesperanza.

Es obvio que en Colombia hay una inmensa situación de injusticia. El 10% más rico de los colombianos tienen un nivel de vida promedio de US\$ 5.000 anuales por cápita, que los sitúa entre los ricos del planeta; mientras el 35% más pobre no sobrepasa los US\$ 400 por cápita por año, lo que los hace asimilables a los promedios nacionales más pobres del mundo. Y el 55% intermedio se ubica penosamente en ingresos anuales de US\$ 650, como si fueran habitantes de un país en que apenas arranca el proceso de desa-

rollo, cuando de hecho los asedia ya por todas partes la angustiada presión de status social de la sociedad de consumo.

Estas consideraciones, más la dominación cultural e ideológica a través de los mass media; más la dominación externa en el contexto geopolítico en que estamos; más la económica, que nos impone un modelo de desarrollo determinado por la acumulación en los Estados Unidos, Japón y Europa, que nos atrapa en la exportación de recursos naturales, en el consumo de importaciones suntuarias y, hoy en día, en el voraz mercado de los narcóticos; todas estas consideraciones, nos hacen copartícipes del común denominador que ha levantado en América Latina una teología nueva, en la cual esta Facultad ya ha comenzado a entregar su aporte: la teología de la liberación.

Y, sin embargo, el problema colombiano hoy en día va más allá de este común denominador, y nos pide una investigación, un análisis y un trabajo con las ciencias sociales desde la inspiración de la fe, frente a un país que, a más de injusto y dominado, es un país violento. Y si hoy en ciencias sociales y en teología se enfatiza la relación entre lo verdadero y lo pertinente, esta pertinencia de la guerra por la paz o de la guerra contra la paz está delante de nosotros como desafío inaplazable si es que nuestra fe ha de iluminar la vida de nuestro pueblo.

Tenemos que preguntarnos muy a fondo por qué en un país católico, quizás el más católico de Amé-

rica Latina si se toma como criterio el peso específico que en la historia nuestra ha jugado la jerarquía y el clero, la pérdida del valor de la vida humana ha alcanzado tales proporciones.

Y tenemos que preguntarnos por qué esta amenaza contra la vida se articula con nuestra historia política y religiosa, con nuestras estructuras sociales y económicas y con el vacío de ética social en nuestro medio, en una dimensión tan profunda que parecería haberse generado entre nosotros una verdadera cultura de la zozobra y de la agresión.

Todavía más, Colombia no es sólo un país donde se da un tipo de violencia sino un país donde la peor de todas predomina hoy. En efecto, se pueden clasificar varias formas de violencia. Hay la violencia estructural, de un régimen económico y político contra un pueblo y que ha sido condenada desde Medellín. Hay la violencia reivindicativa de las gentes que protestan por la opresión estructural y se expresa en huelgas y luchas por la dignidad y por los llamados hoy en día "Merit Goods". Esta es la violencia que hace el pueblo por sus derechos y que ha sido apoyada en el derecho a la huelga por la enseñanza social de la Iglesia. Hay la violencia represiva del Estado, cuando éste responde a la reivindicación popular lanzando al ejército contra las gentes, violencia ampliamente condenada por el Episcopado chileno y

por la jerarquía filipina y haitiana en el reciente colapso de las dictaduras correspondientes, y contra ella se han producido las páginas más audaces de la dimensión profética de la teología latinoamericana. Hay la violencia del caso extremo, cuando todo un pueblo toma las armas contra una dictadura prolongada o un sistema definitivamente injusto y se da un consenso generalizado de que la guerra es el único camino que resta, así como se dan las condiciones para lograr la superación de la opresión y el logro de condiciones más equitativas y democráticas. Este es el caso al que se ha referido el documento sobre la Libertad cristiana y Liberación. caso al que volveré más adelante¹.

Hay, finalmente, la idealización de la guerra o la idealización de la fuerza como camino de solución de los problemas sociales. Esta es la peor de las violencias y, a mi juicio, la que se ha profundizado y venido a ocupar el primer plano en esta sociedad nuestra, desde la cotidianidad de los hogares y grupos humanos hasta la dimensión general de nuestra sociedad. Todos nos vimos en el espejo de esta realidad nuestra en los acontecimientos que precedieron, sucedieron y se desarrollaron en el espantoso espectáculo de las dos tomas: la de la guerrilla y la de los militares, del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.

Esta idealización de la violencia hace de la lucha armada un fin en sí mismo y su crecer es directamen-

(1) Instrucción sobre Libertad Cristiana y Liberación: Ciudad del Vaticano, marzo de 1986.

te proporcional a la caída vertiginosa del valor de la vida en una comunidad humana. No quiero decir que en Colombia hayan desaparecido, con sus implicaciones, las otras formas de violencia. Quiero pedir que reflexionemos a fondo por qué entre nosotros se ha desarrollado la peor de todas, en proporciones que ya casi no es imposible contener.

Voy a sugerir unos pocos elementos de análisis de esta situación en una exposición que avanzará de la siguiente manera: evocará elementos históricos que nos ayudan a ubicarnos. Mostraré la resistencia de la clase gobernante a los cambios necesarios que generó una serie de vacíos políticos, económicos, sociales y éticos que han sido llenados entre otros por la mafia. Veremos como, ante esta situación objetivamente violenta, la guerrilla se ofrece como alternativa radical de cambio estructural. Esta alternativa fracasa en el militarismo y nos deja en la necesidad de buscar otras alternativas, búsqueda a la que la teología debería contribuir.

1. La historia

Empecemos por dar una mirada de grandes rasgos a nuestra historia cargada de guerras. Es una simplificación decir que el pueblo colombiano fue desde su origen un pueblo agresivo. Más bien lo que se encuentra en primer término es el proceso de un país en que las costumbres políticas de la clase dominantes han llevado al pueblo a la guerra desde los primeros días de la vida republicana.

Cuando todavía no se había consolidado la independencia, poco después de los acontecimientos de 1810, se enfrentan los dirigentes criollos entre federalistas y centralistas (pateadores y carracos) en una guerra civil que eclipsó la luna de miel de las primeras libertades, y terminó en los fusilamientos españoles de 1816. A partir de 1826 después del retorno de los soldados colombianos de Perú y Bolivia, confrontaciones armadas entre caudillos se suceden una tras otra. Ya en 1851 la controversia desatada por la emancipación de los esclavos se resuelve con las armas. En 1859, se levanta Mosquera contra Ospina. Después de la Convención de Rio-negro las batallas se multiplican entre los jefes de los nueve estados soberanos: 54 miniguerras civiles al interior de los mismos estados entre 1863 y 1884. En 1867 los liberales radicales se van contra el gobierno liberal de Mosquera y en 1866 el partido conservador hace la guerra contra la administración de Aquileo Parra. En 1885, 1895 y 1899 los jefes liberales buscan el poder por los fusiles y machetes del pueblo y tienen que aceptar finalmente la consolidación de la república conservadora.

Profundamente articulado con los motivos políticos de la clase dirigente van las razones religiosas por la casi identificación institucional entre conservatismo y catolicismo, a partir quizás de la toma de posición de la jerarquía a favor del gobierno ministerial, amenazado por la guerra de los supremos, y posteriormente de la reforma educativa conservadora de Mariano

Ospina Rodríguez. Esta identidad se profundiza con el concordato de 1887 y, en general, como reacción a las reformas liberales de mediados del siglo XIX, que impactan duramente a la Iglesia de la época, que no puede dejar de percibir como ataques directos a su organización y su tarea las políticas del gobierno liberal.

Al entrar el siglo XX, Ezequiel Moreno, el obispo español de Pasto beatificado por Pablo VI, es la muestra más clara de la religión avalando a la política como política violenta. (El obispo está influenciado por la información incompleta y tendenciosa que recibía sobre la situación política de España proveniente de frailes agustinos recoletos y capuchinos integristas, según lo hace ver su biógrafo el padre Martínez Cuesta-González, 1985)². Los sermones del obispo, durante el conflicto de los Mil Días, califica nuestras guerras civiles como “guerra de religión”. Y la pastoral del 25 de junio de 1900 con el grito de las cruzadas: “A pelear por nuestra religión, Dios lo quiere”.

Moreno pedía no dejarse seducir por el “exagerado amor a la paz” que a veces se llama paz a lo que no es sino “complicidad con el infierno” (González, 1986).³.

Cuando aparece el comunismo en Colombia el gobierno conservador lanza una ley represiva (Ley 69

de octubre de 1928) y varios obispos (Monseñor Brioschi, de Cartagena; Monseñor Builes, Monseñor Tiberio Salazar Herrera, de Manizales) defienden y ponderan los valores de esta ley contra elementos “subversivos y extraños”. En tal contexto se hace la matanza de las Bananeras. Solución militar a un conflicto social legitimada en la defensa contra el comunismo ateo.

Al iniciarse la república liberal, durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera, Monseñor Builes levanta su voz, señalando al gobierno como “comprometido con los protestantes norteamericanos y amistado con la masonería: tolerante con socialistas y comunistas, y dispuesto a fabricar una hegemonía liberal destruyendo a cualquier costo las auténticas mayorías”. Builes escribirá que las reformas de la administración liberal son “una campaña contra Dios y la Iglesia”. Y, denunciará la violencia liberal que busca “destronar a Cristo” y que se ciñe sobre los campesinos conservadores que claman venganza desde sus tumbas.

Las posiciones de la Iglesia de identificación con el partido conservador y en confrontación hasta la guerra santa con el liberalismo y el comunismo, explican en cierto grado, el 9 de abril de 1948, la reacción del pueblo liberal que se levantó contra el gobierno conservador al que culpaba del crimen y,

(2) Fernán González, Iglesia Católica y Sociedad Colombiana (1886-1986) mimco. CINEP, 1986.

(3) Ibid.

de contera, quemó templos y colegios religiosos y martirizó sacerdotes. Nada sorprendente que pocos días después algunos obispos condenaran al liberalismo como aliado del comunismo en el Bogotazo.

Es bien cierto que, ni todos los jerarcas, ni todos los clérigos, participaron en esta actitud de enfrentamiento bélico a lo largo de nuestra historia religiosa y política, ni todos los líderes conservadores estuvieron de acuerdo con la concomitante instrumentalización de la Iglesia. Así por ejemplo es necesario recordar la diferencia de puntos de vista en la jerarquía eclesiástica. Mientras el obispo de Santa Rosa de Osos, por ejemplo, condenaba en 1942 la lectura del diario liberal *El Tiempo*, Luis Concha Córdoba, arzobispo de Manizales, alababa "el tono respetuoso" que el periódico utilizaba siempre con la Iglesia. Estas consideraciones ayudan a comprender cómo la pasión religiosa exacerbó a tal punto los espíritus que las mismas motivaciones evangélicas llamando a la paz cuando se desata el período de la violencia en 1949 no pudieran contrarrestar el odio que la propia religión había ayudado a desencadenar.

Para tener la totalidad del cuadro habría que añadir a estos trazos partidistas y religiosos de nuestra historia las luchas campesinas e indígenas de este siglo por la tierra que les había sido arrebatada, el bandolerismo que se hizo *modus vivendi* en algunos bolzones de la población, y, en el contexto de las luchas internacionales por la disputa entre sistemas económicos y

sociales, la lucha armada por la transformación estructural de la sociedad que se desarrolla desde el comienzo de los años 60, tras la revolución cubana.

2. El comportamiento de la clase dirigente

Dejemos allí la historia y veamos, lo que yo llamaría la incompreensión y resistencia de la clase política a adelantar los cambios que el desenvolvimiento histórico del país reclamaba.

La sociedad colombiana se transformó profundamente en los últimos cincuenta años. El país pasó de rural a urbano. Las ciudades crecieron a tasas del 7% anual, por la migración y la expansión natural. El llamado "sector informal urbano" de la economía comenzó a sustituir al modo de ganarse el sustento de los antiguos campesinos. El país pasó de analfabeta, donde sólo había con estudios de secundaria una en cada 10.000 personas a un país más que medianamente instruído donde de cada 1.000 ciudadanos 700 tienen algún estudio de bachillerato, en las cohortes poblacionales que vienen desde los años 60; pasó de ser un país en que la información era monopolio de unas pocas familias importantes, de las cuatro ciudades más grandes, a un país donde la información circula por los barrios populares, las fábricas y las veredas campesinas a través de la radio y la televisión. Este acceso a la instrucción problematizada por un magisterio frecuentemente crítico de la realidad nacional, y este circular de información, tenían que elevar las expectativas

sociales de un nivel de vida más alto propiciadas por la sociedad de consumo, y la afirmación de los derechos y de la dignidad, y consecuentemente traer un deseo profundo de participación cívica y política en las decisiones que tocaban el bien de todos.

Podía detenerme en muchas otras cosas que cambiaron en los últimos 50 años, pero mi propósito es solamente llamar la atención sobre transformaciones que estos cambios estaban exigiendo, transformaciones que nunca se hicieron.

Un ascenso tan grande de la sociedad emergente, que se expandía en una verdadera economía popular en barrios y pueblos, pedía una orientación rigurosa del gasto público a la formación de una infraestructura sólida de bienes básicos para todos: subsidio a los alimentos indispensables, acueductos y alcantarillados, servicios de salud, transferencias estatales a la necesidad de vivienda, caminos de penetración en el campo etc., para establecer lo que se ha llamado las condiciones materiales de la circulación económica y de la democracia. Pero las mayorías del país se quedaron sin este piso fundamental de cualquier estructura social, y fueron estorbadas en sus iniciativas económicas populares o informales.

Obviamente esta red básica, apoyada en el gasto público, hubiese liberado ingresos familiares para activar la demanda interna e incen-

tivar la producción, con lo cual se había evitado un desempleo abierto que friza en un millón y medio de colombianos.

La creciente complejidad de la población exigía un desarrollo concomitante de la rama judicial que nunca vino. Y las demandas regionales y locales de participación en la cosa pública llamaban a una modernización del Estado que sólo parece tener una posibilidad incierta ahora, en la anunciada elección popular de los Alcaldes. Se frustró entre otras una reforma agraria que anunció oficialmente la redistribución de más de diez millones de hectáreas y gastó más de 26 mil millones de pesos durante 20 años (1962-1982) en el INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria), en gastos que fueron fundamentalmente un *alibi* a la redistribución de la tierra⁴.

3. Los grandes vacíos

La incapacidad para percibir la urgencia de estas reformas o quizás aún, la resistencia de la clase política a las mismas, mientras se acrecieron las expectativas de las gentes, profundizaron un triple vacío en nuestra sociedad, vacío de oportunidades económicas para muchos y de Estado y comunidad civil para todos. A esto se iba añadir el vacío ético.

En realidad lo que uno encuentra en el horizonte macro de violencia es la confluencia de estos vacíos

(4) De hecho solo un 5% del total se pagó en tierras en esos 20 años; 1.345. 6 millones.

que en las regiones de conflicto o zonas de rehabilitación del país se profundizan. Estos territorios suman más de la cuarta parte del espacio colombiano y en ellos viven en zozobras más de tres millones de hombres y mujeres. Número de gente que es superior a los siete millones cuando adicionamos a esas regiones rurales los barrios populares de las grandes ciudades donde se dan abruptamente los mismos vacíos.

El vacío de Estado

Allí el vacío de Estado se manifiesta en que éste no aparece ni para asegurar los bienes básicos, ni para dar seguridad social, ni para garantizar la salud o la legislación laboral, ni para ejercer la justicia de las leyes. Caso bien conocido es el del retraso en titulación de tierras. Si hoy se lograra atajar la apertura ecológicamente depredadora de la frontera agrícola, y el INCORA se dedicara a dar a los colonos los títulos de las tierras abiertas hasta esta fecha, se necesitarían veinte años, al ritmo actual, para dotar a los campesinos de la documentación que hiciera respetar sus derechos. Mientras tanto el colono queda abandonado a la incertidumbre de una tierra que puede arrebatare el terrateniente en expansión o los políticos de turno. O el caso de la falta de maestros en las veredas e inspecciones del municipio de Tierralta, Córdoba (un municipio más grande que el departamento del Atlántico). Los maestros fueron pagados por "soluciones educativas" del Estado hasta el día de elecciones presidenciales de 1986, y desde entonces en muchas partes, se suspendieron los pagos.

La situación se agrava cuando otras dimensiones del Estado tienen una presencia contraproducente o perversa. Tal es el caso del robo que han hecho las burocracias políticas en el poder real de las regalías generadas por el petróleo y la minería en estas regiones, y que estaban asignadas a acueductos, alcantarillados y obras de salud que nunca se hicieron. Cuando el pueblo se levanta en protesta por la falta de agua potable, o de hospital, o de vías de penetración, o de títulos legales, o de maestros, muchas veces se ha lanzado a la fuerza pública contra las gentes. Y se demoniza la protesta ciudadana diciendo que es organizada por la guerrilla, por el comunismo o por los narcotraficantes.

No discutimos la necesidad de una dimensión punitiva del Estado, que en los cuerpos policivos contribuya a garantizar la sanción social contra los infractores de la ley, pero cuando esta dimensión punitiva es el único rostro del gobierno que conoce el pueblo lo natural es que se produzca un rechazo generalizado. El resultado ha sido la desconfianza en las instituciones públicas, el desprecio del Estado y la inseguridad que siente la gente ante la policía y el Ejército protectores de ese mismo Estado, ausente de las necesidades ciudadanas, ladrón de las riquezas regionales y padrino que protege con fuerzas armadas riquezas concentradas que no quieren ser productivas, frente a la pobreza ampliamente distribuidas.

El vacío económico

El vacío económico deja un 35% de la población en la pobreza abso-

luta, saca cada año del país más de mil millones de dólares que se van acumular en el norte para nuestras clases dirigentes cuando deberían ser aquí creadores de empleo, en deuda al país con obligaciones que paga con tarifas el pueblo, ha dejado sin seguridad social a las mayorías, ha sacudido la cotidianidad de los colombianos en las últimas tres décadas entre bonanzas con inflación, déficit fiscal y externo y crisis atajadas con políticas restrictivas, que desploman la capacidad de consumo de los trabajadores y de los pobres. Este vacío dejó a una población sin tierra, sin empleo; perdida en los trabajos de rebusque de la economía informal que el Estado, sin entender, asedia con leyes y complicaciones burocráticas; en el robo para la subsistencia, en la migración masiva al extranjero, o en la colonización con que se lanzaron desesperadamente a abrir la frontera agrícola millares de campesinos, a costa del equilibrio ecológico del país. En una invasión humana de pobres que desesperaron de la reforma agraria y cayeron sobre la selva sin vías de penetración, sin mercados asegurados para la producción rural, abandonados finalmente a la única demanda posible: la de los comerciantes de la droga.

El vacío de Sociedad Civil

El vacío de Sociedad Civil se deja sentir profundamente en la ausencia de comunidad. El colono abandonado, es un desaparecido en la jungla inhóspita en un espacio sin leyes, donde muchas veces los hombres son más feroces que los tigres. El campesino, un individuo

aislado en su parcela, asediado por enemigos que en su soledad percibe gigantescos, desconfiado y receloso. El habitante de los barrios marginados, un recién llegado que cortó sus raíces rurales huyendo de las guerras, para caer de improviso en un vecindario de desconocidos, donde no importa el nombre de nadie porque nada significa, y donde sobrevivir cada día es una aventura, entre el hacinamiento físico y la total imposibilidad de planificar un futuro.

En esta atomización de la indigencia, de la desconfianza, de la separación física, de la ausencia de referencia grupales, no faltan hombres y mujeres, de pronto un maestro, un cura o una monja, que buscan desde el fondo de la vereda de colonos o desde el barrio marginado, comenzar a tejer comunidad humana. Porque intuyen que solo en una comunidad se puede ser persona. O porque ven en la ayuda mutua la única salida a sus angustias. O guardan la reminiscencia familiar de otros tiempos y otros lugares en que se era casi una tribu campesina. O descubren que hay que protegerse de los políticos que los asedian en búsqueda de votos y hay que aprender a negociar con un estado errático, improvisador y versátil, percibido como aparato al servicio de quienes lo regentan y sediento de sacar ventaja de todos los demás.

Urabá, el Bajo Cauca, Córdoba, el Magdalena Medio, el Oriente del Cesar, Arauca, el Río Minero, Puerto Boyacá, el Ariari Guayabero, el Huila, Caquetá, Putumayo, El Cauca, Municipios del Norte de

Nariño y pedazos del valle y Antioquia, además de inmensas barriadas como Aguablanca en Cali y ciudad Bolívar en Bogotá, forman lo que podría llamarse el agujero negro, donde el vacío de Estado, de posibilidades materiales y de comunidad civil, parecería estar produciendo un efecto de succión sobre la totalidad de la sociedad colombiana.

Los tres grandes vacíos que hemos considerado no pueden menos que crear un estado de cosas tremendamente proclive al estallido de la guerra. Sobre todo cuando ellos se dan sobre el telón de fondo de la historia de conflictos armados, y frente a una clase política que se resiste a los cambios que las mayorías piden. Pero un elemento más viene a agravar la situación: el vacío ético, de una sociedad que perdió su moral católica y no desarrolló una ética ciudadana.

El vacío ético

La caída de la moral católica como referencia final de todo el comportamiento de un pueblo no tiene que significar necesariamente la precipitación en el abismo. Países que nuestro sentido común califica de laicos como Uruguay, o de ateos como Suecia, o de paganos como

Japón, o de protestantes como Inglaterra, han desarrollado una ética civil que, sin que falten las inevitables infracciones, están lejos de la situación de anomía que nosotros hoy vivimos. Incluso, la independencia de más y más campos de la vida social, controlados por la regulación moral católica, puede ser entre nosotros constatación de esa autonomía de la sociedad civil tan lúcidamente apreciada por la *Gaudium et Spes*. Un movimiento sustancial en esa dirección parecería apreciarse por importantes investigadores nacionales y extranjeros, como Malcom Deas y Alvaro Tirado Mejía, que consideran que la secularización acelerada de la sociedad colombiana de los últimos veinte años, es el cambio más importante del país en el mismo período. Pero, a mi juicio este proceso sano, ha conllevado un problema grave: durante este período se desvanece la moral religiosa y las gentes no han sido preparadas con una ética cívica que sustituya lo que antes se cumplió como mandamiento divino. De hecho, lo que se ha dado es el *secularismo*. En una sociedad que salta del institucionalismo católico a la anomía social sin haber conocido la secularización. Este problema parece estar en el núcleo de comportamientos anómalos peligrosamente diseminados en Colombia⁵.

(5) El problema metodológico que aquí aparece es el de las relaciones entre razón y fe en la elaboración y comunicación evangelizadora del comportamiento ético. Si en Colombia la evangelización ha fallado, al no dotar a las gentes de una ética para la vida, en una sociedad cambiante, muy posiblemente se debe a una ingenua (en el sentido de no metódicamente crítica) asunción de que el comportamiento ético cristiano es, en cuanto a sus contenidos concretos, una especie de supra-estructura moral "recibida" de Dios en Cristo, y en cierta manera como "añadida" a la simple y llana "autenticidad" humana.

Una hipótesis para explicar esta situación es que la Iglesia católica, tan asidua en una predicación ordenadora del comportamiento social desde los templos, y encargada, no sin disputas ni forcejeos, de la tutela de la educación nacional hasta hace dos décadas, no se preocupó por o no encontró una metodología para contribuir a desarrollar una civilización estatal o una comunidad civil. Lo que parece haber centrado la preocupación de la Iglesia fue el desarrollo de la civilización católica y de la comunidad religiosa. Lo importante para la Iglesia era hacer buenos católicos y eso no coincidía necesariamente con hacer buenos ciudadanos. Por eso, normas importantísimas de la vida ciudadana como disposiciones sobre el contrabando y la tributación o el manejo de los dineros públicos por los funcionarios de turno, podían pasarse por alto, sin incurrir en *pecado*, siempre y cuando se cumpliera los dictámenes de Dios y de su Iglesia.

Por supuesto hubo gentes, educadores y predicadores de la Iglesia que, desde los comienzos mismos de la república, refirieron con personalidad y precisión a la construcción de la sociedad civil, pero

en el conjunto *total de nuestra* sociedad estas personas no parecen representar lo que podríamos llamar la media del comportamiento masivo, más bien su manera de pensar se desviaba sensiblemente del centro de nuestra vida nacional.

Una hipótesis más radical para explicar este fenómeno, diría que el catolicismo colombiano, expresado históricamente por el comportamiento central de jefes, sacerdotes, intelectuales y catequistas se proyectó como obstáculo continuo al desarrollo legítimo de la autonomía de la sociedad civil, vulnerando con la sospecha y el desdén a las instituciones estatales y cívicas, consideradas como cuestionables, y sospechosas, y poseedoras de una soberanía frágil, al lado de la institución perfecta de la Iglesia⁶.

Esta resistencia contra la dignidad soberana de la conducta civil parece haber vulnerado el corazón del aparato legal colombiano, que quedó acá y allá atravesado por la irrelevancia definitiva. Tendríamos así un cuerpo de leyes que bien puede no cumplirse porque en última instancia su violación no toca a Dios ni a su representante legal la

Esta ausencia de método pone de relieve la importancia decisiva de nuestro obrar atenta, inteligente, razonable y valorativamente en fe, desde dentro de la seriedad de la historia humana. De aquí se sigue la urgencia de dos tareas complementarias: la interdisciplinariedad en la elaboración teológica de los criterios concretos e inmediatos de comportamiento social entre nosotros; y una praxis evangelizadora que se arraigue en la "autenticidad" estructural del hombre como tal.

(6) Algunos documentos de la Conferencia Episcopal Colombiana en los últimos años han mostrado especial cuidado e interés en los derechos y deberes ciudadanos, con diagnósticos y criterios de una crítica fuerte y constructiva, desde la inspiración de la fe.

Iglesia. Y como los legisladores saben que las leyes no se cumplen, se han encargado de sofisticar la misma legislación para que ésta termine por legitimar desde sí misma su propia violación.

La hipótesis queda allí, en su manera moderada o radical para explorar la explicación del vacío ético de una moral predicada y ensañada que se abandona, y una ética civil sustituta aún sin aparecer en el comportamiento masivo de los colombianos actuales, muestra de un proceso abortado de una verdadera secularización.

La Mafia

Me he detenido a presentar una cadena de ausencias en nuestra sociedad, ausencias que alcanzan dimensiones insostenibles en una población que se queda sin Estado, sin presente ni futuro económico, sin comunidad civil y sin ética que regule las relaciones humanas.

Pero la sociedad como un todo tiene que encontrar caminos de sobrevivencia cuando faltan sus componentes estructurales, si no va a resignarse a desaparecer. Es una ley de la ecología social y Colombia ha encontrado salidas para mantenerse a flote. Una de estas salidas es, entre otras, la mafia del narcotráfico. Esta ha venido a llenar casi todos los vacíos⁷.

El narcotráfico llena el espacio económico para miles de colombia-

nos: la producción y distribución de marihuana y coca en zonas indígenas y de colonización, asegura el transporte y los precios que nadie le garantizó nunca a la pequeña producción campesina. Y miles de hombres y mujeres viven de la transformación de la yerba y el alcaloide, su acarreo, e intermediación; o han encontrado un empleo como guardias de familias mafiosas; o pertenecen económicamente a algunos de los eslabones de insumos, y servicios, que dan piso social a la producción y comercialización de la droga. Esta misma población ha tenido que pagar un precio inmenso: los mecanismos de mercado de un producto cuya oferta tiene que crear su propia demanda interna y externa, ha multiplicado los drogadictos en todos los sectores del país, y más entre aquellos donde la droga es un escape a la desesperación del desempleo y de la salida a la miseria, y los enviados roban y matan para hacerse a los medios de obtener los alucinógenos.

Por encima de esta base social que ha encontrado en la droga el acceso a los bienes suntuarios, de la sociedad de consumo, y que pondrá la mayoría de los presos y de muertos en la actual cruzada nacional contra el narcotráfico, en que muchos jueces, policías y militares están arriesgando su vida, están los grandes mafiosos, los intocables, los varones colombianos. Estos, irónicamente, mientras alimentan a los grandes compradores

(7) Otra alternativa de gran importancia es la "economía informal".

de Estados Unidos, juegan o pueden jugar un papel en la autonomía económica de este país visceralmente dependiente. Por eso se ofrecieron a pagar la deuda externa. Y fácilmente ellos inyectan a la economía interna alrededor de 4 mil millones de dólares por año, determinando sin duda la expansión actual de la demanda y el movimiento del mercado de divisas en Colombia.

La mafia ha llenado también el vacío del Estado. Los narcotraficantes distribuyen ingresos, ofrecen seguridad social, dan limosnas, construyen centros de vacación, pagan festivales populares, establecen a su manera su propio estado de bienestar y dictan sus leyes. Leyes con jerarquías y lealtades personales que se exigen con la pena de muerte.

Y la mafia ha venido a explicitar sin ambages la ética subyacente en la economía del poder del dinero. Todo es legítimo si a cambio puede ofrecérsele el dinero pedido. Y los medios para conseguir dinero se justifican por la cantidad de dinero que ellos mismos produzcan.

En semejante situación "narco" es un prefijo que se pega naturalmente de todo el tejido social: Hay narcolimosnas, narcoguerrilla, narcoejército, narcopolicía, narcojueces, narcofútbol, narcocomerciantes, y por supuesto narcoparlamentarios.

He estado invitándolos a ustedes a que evoquemos la historia de guerra a que las clases dirigentes condujeron al pueblo. He hecho

referencia a los cambios sociales y políticos que los grupos que sustentan el poder no han visto o no han querido hacer. He señalado algunos de los vacíos fundamentales de una sociedad con carencias de civilización estatal y comunidad civil, sin caminos económicos para grandes masas y sin ética ciudadana, y he sugerido que la mafia, paradójicamente, ha hecho su invasión eficaz y desconcertante de los espacios abandonados por la responsabilidad de todos. Ante semejante estado, cómo no concluir que en Colombia se da un caldo de cultivo de la violencia que tiene que ser cambiado completamente si se quiere construir la paz:

4. La alternativa guerrillera

La alternativa que algunos colombianos han escogido para transformar estos contextos violentos ha sido, desde los años 60, la alternativa de la lucha guerrillera.

El guerrillero busca cambiar un Estado que a su juicio sólo existe para robar, manipular o reprimir. Promete construir una comunidad. Frente a la ausencia de ética, predica al hombre nuevo surgido de la revolución, que en contradicción total con el comportamiento mafioso rechaza la acumulación de dinero y el consumo suntuario como sentido del vivir humano; toma las armas porque está convencido que las clases dirigentes no aceptarán por las buenas el cambio de estos contextos de muerte. Sospecha del Clero y de la jerarquía porque ve en ellos los legitimadores morales de un orden injusto. Invita a conquis-

tar el poder con los fusiles para desde allí cambiarlo todo.

Obviamente esta alternativa tiene mayor acogida y mayor posibilidad de desarrollo en los territorios llamados de rehabilitación: allí donde los contextos violentos acumulan más todos los vacíos y donde la misma acumulación del abandono ha dado tierra fértil al crecimiento de la mafia.

Hay que anotar que este común denominador de la guerra como alternativa al sistema imperante se motiva hoy diversamente según las regiones. En Urabá se pelea por razones de injusticia laboral. En Córdoba y el Magdalena Medio se lucha contra los terratenientes. En Arauca se enfrenta a los enclaves petroleros. En Ariari, Guayabero y el Caquetá se defiende la agricultura campesina cimentada en la coca. En Cauca se lucha por el derecho primario de los indígenas sobre la tierra...

Con todo la lucha armada no ha logrado cambiar los contextos violentos contra los cuales trabaja y ha terminado por hacerse contraproducente para el fin que pretende. No ha conseguido llenar el vacío de Estado ni de sociedad civil, ni de ética ciudadana, ni ha podido sustituir el dominio de la mafia, al contrario, no pocas veces ha quedado atrapada en "alianzas tácticas" con el tráfico de drogas.

En los territorios de rehabilitación, y en las grandes barriadas populares, donde más asiduamente se ha desarrollado la alternativa de

esta lucha, el Estado sigue ausente a no ser por sus incongruencias o por la represión armada que se ha multiplicado. La comunidad, que se esperaba crear en torno a la guerrilla, lejos de constituirse se ha dispersado. En los vecindarios marginados y zonas de guerra, la gente se ha atomizado, el miedo y la desconfianza se han generalizado. Porque muchos campesinos y pobladores han quedado entre fuegos de batallas o han padecido las operaciones rastrollo del ejército. La ausencia de la ley ha sido sustituida por jefes de cualquiera de los bandos que dictaminan qué es justo y qué debe condenarse a la desaparición.

En consecuencia, los elementos que hacen del contexto un contexto violento, se han reforzado y complicado, haciendo más amarga la vida de los pobladores.

Sería falto de objetividad negar que la lucha guerrillera haya traído beneficios. Sólo que los costos han sido tan grandes en vidas humanas de campesinos guerrilleros y soldados, y destrucción de la comunidad, que no justifican los beneficios, y que éstos quizás hubiesen podido obtenerse por otros caminos. Beneficios son las reformas que han vuelto a discutirse en el Congreso y que quizá nunca se hubiesen llevado de nuevo al debate sin los documentos de la Uribe: redistribución de la tierra, elección popular de alcaldes, y todo el discurso y la búsqueda de capitales para hacer lo que Belisario llamó Plan Nacional de Rehabilitación y Virgilio Barco llama la Estrategia contra la pobreza absoluta.

De todos los resultados de la lucha armada el más grave a mi juicio, ha sido el impulso de la mentalidad integrista de los grupos enfrentados y el concomitante abandono de la controversia política como camino de intentar la conquista del poder y los cambios sociales.

Después de tantos años de lucha armada sin otro logro fundamental que más lucha armada, más presupuesto militar, más estado de sitio y más leyes represivas contra legítimas protestas populares, uno no puede menos de convencerse que el camino de las armas no es el camino para superar la injusticia en Colombia.

Es por lo mismo un camino sin sentido. A menos que tenga un sentido suficiente para entregar la vida, el lanzarse a la guerra para que conste que uno era un adversario radical de la inequidad del statu quo.

Cabe aquí un comentario sobre el caso extremo, en el que a un pueblo no le queda más que la lucha armada para enfrentar una tiranía o un sistema injusto. Caso que, bajo ciertas condiciones, es justificado en el documento de Libertad cristiana y Liberación. A mi juicio, ese caso es imposible hoy al interior de las áreas geopolíticas dominadas por las dos grandes potencias. A no ser para legitimar las guerras que las mismas potencias promueven al interior de sus dominios.

La guerra por lo mismo es hoy interna y externa simultáneamente, y no parece tener solución ni en el

corto ni en el largo plazo. Por eso en todas partes se habla hoy de diálogo. Lo buscan las guerrillas en el Salvador; lo buscan los sandinistas en Nicaragua con la salvedad que advierten que nada hay que hablar con los *contras* sino con Reagan, el presidente de Estados Unidos, quien los paga y defiende y se niega a dialogar con el gobierno de Managua. Y el diálogo hubiese sido otra cosa en Colombia, como búsqueda de una solución política y no militar, si los enemigos de la paz, agazapados en el gobierno, que ganan con una guerra sin término, no hubieran frustrado el intento de la conversación y del debate sobre las reformas que reclamaba el país.

Hay que notar que esta realidad que la guerra como *modus vivendi* es inexplicable sin comprender el juego que los bandos enfrentados hacen a la producción y venta internacional de armas, único negocio que a nivel mundial sobrepasa a los narcóticos. Militares y guerrillas compran artefactos de guerra en el mercado mundial, para matar de lado y lado a los que piensan distinto que los otros. Y como en todas partes, los grandes productores de armas venden a los dos bandos y hacen saber a los unos los equipos que han adquirido los otros para incentivar las compras de todos.

El militarismo

No es posible aquí seguir adelante sin llamar la atención sobre lo que podríamos llamar el militarismo de derecha o de izquierda. Esta es una ideología de la que no participan todos los miembros de las

Fuerzas Armadas, y de la que participan no pocos jefes políticos y miembros de nuestras clases dirigentes. Como ideología es una posición totalitaria, que busca destruir al adversario con legitimaciones últimas: Dios lo quiere, o la defensa de la civilización cristiana lo exige, o, en el militarismo de izquierda, la causa mundial del proletariado y el proceso inevitable de la historia lo reclaman. Los católicos sabemos de totalitarismo integrista porque no somos inocentes: Cargamos con las cruzadas, la inquisición, y los argumentos históricos para matar liberales y comunistas.

Es indispensable medir las proporciones que el militarismo ha conseguido hoy en día en nuestra sociedad. Lo ocurrido en el Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 es una realidad que tenemos que desentrañar hasta el final, porque solo hechos como ese nos revelan realidades que saltan por encima de nuestro temor a hablar para decirse por sí mismas. El Palacio de Justicia fue en la primera toma el militarismo totalitario de la guerrilla colombiana, aprobado post factum por hombres y mujeres de grupos radicales y, en la segunda toma, el totalitarismo militarista del ejército y la policía colombianas y de numerosos dirigentes políticos y gremiales que avalaron el holocausto.

Tanto la utilización de los magistrados como rehenes para hacer un juicio contra el sistema, como la decisión de no detenerse en costos humanos con tal de que murieran los enemigos, para salvar las instituciones, son, de uno y otro lado, el

hombre puesto al servicio del sábado.

Por qué extrañarse entonces si después se multiplicaron los "Palacios de Justicias": el asesinato de Ricardo Lara Parada por el ELN en Barranca. Las tumbas de Tacueyó. Las operaciones rastrillo de Siloé. Más de 100 militantes de la UP asesinados desde entonces, entre ellos un Senador y dos representantes. Las operaciones limpieza en Cali los fines de semana, en que aparecían más de 20 muertos en los puentes y andenes de los barrios populares. Los trece hombres y mujeres humildes que mueren cuando iban al trabajo en un bus en Barranquilla. Los dos extremos enfrentados sobre un común denominador totalitario y militarista han ido multiplicando sus propagandas bélicas, han mentido a la nación, han hecho batallas de contra información para que nadie en Colombia sepa lo que pasa y lo más breve, han estrechado el campo de la conversación, de la participación directa de las gentes, de la controversia ciudadana.

5. Construir otras alternativas

Cada día estoy más convencido que una de las tareas más urgentes de quienes trabajamos en la reflexión social y en los sectores populares es la tarea de debatir a fondo con los jóvenes la alternativa guerrillera y cuestionar sin remedio y sin descanso este camino. Pero nada podemos lograr en tal debate, si simultáneamente no contribuimos a construir otros caminos que sean menos costosos en términos de vidas y valores humanos y más benéficos

en la transformación estructural y profunda de este inmenso campo de cultivo de la violencia.

Pensar en alternativas supone pensar en un trabajo interdisciplinario y pluralista, y obviamente las cosas que voy a sugerir para terminar son tremendamente complejas, de ellas yo no conozco la solución y las planteo dentro del horizonte de que no hay modelos sociales sino sujetos sociales. Que nuestra contribución muchas veces se limita a ayudar a plantear bien los problemas. Y que no basta describir una situación, hay que tratar de explicarla y hay que establecer juicios de hecho sobre las distintas alternativas posibles; finalmente hay que tomar decisiones.

En primer lugar las alternativas que tenemos que pensar no pueden ser alternativas de contrainsurgencia. No se trata de acabar la guerrilla y fortaleciendo al ejército. Se trata de trabajar por cambiar el estado general de cosas y en cada región específica el contexto violento que ha llevado a algunos colombianos a tomar las armas justamente para cambiar las cosas. Por eso se trata de alternativas que hagan posible la democracia y la libertad, y superen los desarreglos profundos que han dado oxígeno al crecimiento de la mafia.

En segundo lugar, las alternativas tienen que ser creíbles para la gente joven. Cerca de diez mil hombres hay en el país levantados en armas contra el sistema, con una red de apoyo 30 veces más grande. Esos hombres y mujeres tienen a su favor

la decisión de dar la vida por una causa, y sienten premura de que esa causa la vea ganada su generación. Si nosotros no contribuimos con otros, a estructurar alternativas tan concretas, laboriosas y dispuestas a todos los riesgos, que pidan la entrega de la vida, no podemos pretender que quienes han aceptado hasta la entrega de sí mismos vean con interés lo que con otros proponemos se haga.

La diferencia entre los guerrilleros y muchos políticos y muchos de nosotros clérigos y seculares católicos, es que los políticos y nosotros meramente hablamos y los guerrilleros se meten en un camino de restricciones tenaces donde lo que se dice hay que probarlo con la vida arriesgada en cada instante.

La credibilidad de estas alternativas tiene así que ponerse en la balanza con la opción guerrillera, en un pueblo que está reivindicando sus derechos frente a un statu quo que se resiste a dar paso a las demandas populares.

Tenemos que explorar vías que en Colombia hemos pasado por alto, sorprendidos quizá por lo abrumador de nuestra situación. Estas vías son la no-violencia activa, la resistencia popular, la desobediencia civil de Luter King, Thorow y Gandhi, que buscaron llevar a la gente ordinaria a logros extraordinarios; la defensa directa de los derechos de los pobres que se enfrentan intransigentes sin armas ante las fuerzas del Estado y de la mafia, y que Monseñor Romero llamaba la violencia moral.

Estas formas de lucha han venido aumentando en los últimos años en Colombia en forma de paros cívicos, en que la totalidad de una ciudad o de un pueblo se lanza a la huelga pacífica exigiendo lo que les pertenece como ciudadanos⁸.

Es obvio que estas formas de lucha requieren la entrega total. Sólo pueden cimentarse sobre la fortaleza moral de hombres y mujeres dispuestos a acompañar al pueblo todo el camino y de serios espíritus inscrutadores de la realidad social que se vive, porque la complicación de la cosa política y de la cosa humana sólo es abaricable por el aporte de muchos.

Por otra parte estas formas de lucha son costosas. Quiero decir que en ellas hay caídos. Pero nada hay más eficaz que un grupo de hombres y mujeres inermes, que siguen avanzando impávidos a la conquista de sus derechos. Sobre todo, estas formas de lucha generan inmediatamente solidaridad y una actitud ética que trasciende a todos los campos del comportamiento y se basa en el respeto de la vida.

En tercer lugar, las alternativas tienen que llenar el vacío de comunidad civil existente. Esto supone un trabajo de convocatoria de todos los estamentos sociales, para que las gentes hagan una democracia participativa, tomando control paulatino de su vida, sus derechos, su producción y su mercado.

Hacer comunidad es una tarea tan delicada como impostergable y se supone que nosotros, cristianos y estudiosos de la fe, somos especialistas en ello. Hay aquí una necesidad de ahondar en una educación personalizada que avance en esta dirección. La necesidad de educar para una sociedad civil se basa en un axioma sencillo de la vida en sociedad: El comportamiento es una consecuencia de las creencias, de las convicciones y de los valores. Cuando un número grande de ciudadanos cree ciertas cosas y estas creencias se transmiten naturalmente de padres a hijos, como reglas de la tribu que confieren identidad y sentido de pertenencia al grupo, estas creencias suelen convertirse en normas de comportamiento general.

La tarea, desde las parroquias y grupos cristianos y desde la educación formal e informal, es contribuir a la construcción de la comunidad civil autónoma, distinta de la comunidad católica. Comunidad a la que servimos desde nuestra fe, de la que tomamos parte con todas las gentes de buena voluntad, a la que todos deben ser convocados independientemente de sus posiciones políticas o ideológicas.

Esta es la comunidad local y regional, que garantiza la verdadera democracia, relativamente autónoma pero que no sustituye al Estado. Pues entra en concertación con las entidades públicas para la planifica-

(8) Entre 1982 y agosto de 1986 se dieron en Colombia 97 paros cívicos y 143 movilizaciones ciudadanas globales. Datos de CINEP.

ción, ejecución y evaluación de lo que es incumbencia del Estado pero siempre bajo la hegemonía local de la comunidad en cuestión.

Estas alternativas exigen un cambio profundo en el Estado mismo. (Una necesidad que hoy se plantea en Colombia como la urgencia de institucionalización y normalización). El problema de fondo es contribuir a la gestación de una civilización estatal, como cultura y estructura, que nos atañe a todos, en un país donde el Estado ha sido botín de grupos políticos y sectores pudientes de la población, que lo han manejado como tesoro y poder totalitario y no instrumento del bien común, establecido por el consenso de todos para las necesidades de todos.

En el mismo sentido se impone a nuestra reflexión la tarea de contribuir al desarrollo de una ética cívica, basada en el respeto de las más diversas posiciones y enriquecida con los puntos de vista de todos en un verdadero ecumenismo social y político.

Esta ética, diferente de la moral católica, tiene que situarse muy bien desde nuestra visión del hombre y de la historia, para que podamos desde la fe cristiana contribuir a una tarea humana que compartimos con no creyentes en la maduración de una auténtica secularización social.

En cuarto lugar, tenemos que repensar a fondo la economía, en la búsqueda de otros caminos que tienen que basarse en las comunidades locales y regionales e inten-

tarse de abajo hacia arriba. De tal manera que se decida localmente todo lo que pueda decidirse localmente y se resuelva regionalmente todo lo que pueda resolverse regionalmente, y se deje para los niveles nacionales e internacionales sólo lo que no puede decidirse sino a tales niveles.

Los nuevos caminos tienen que liberar a las regiones del totalitarismo de la macroeconomía, que tanto ha contribuido a imponer decisiones centrales sobre problemáticas regionales desconocidas. Tienen además que trabajar con sujetos sociales y no con modelos invitando a la gente a participar en los diagnósticos y proyectos que tocan sus intereses.

Hace rato que un trabajo interdisciplinario nuestro, penetrado por todas partes por la reflexión teológica, debería estar presente críticamente en la defensa de las mayorías pobres y la dignidad de todos, en los debates de las iniciativas más importantes del ejecutivo y el Congreso: La Reforma Tributaria, la Electoral, la Agraria, la Pobreza Absoluta, el Sector Informal, etc.

Y hay muchas cosas concretas en que nuestro aporte podría lanzarse con audacia si cientistas sociales y teólogos nos enfrentáramos a la cotidianeidad económica del país.

En quinto lugar, tenemos que enfrentar el problema de la mafia desde la dimensión de fondo que nos corresponde. Entre otras porque es asunto que no se soluciona-

rá con medidas policivas. La mafia es de una parte el imperio del dinero sobre todo comportamiento humano. Es el único camino que muchos colombianos tienen para acceder a los lujos de la sociedad de consumo, cuando sólo hay sentido en el tener cosas y éstas son más importantes que los seres humanos.

Por eso la reflexión liberadora sobre la droga tiene que enfrentar las entrañas mismas de la teoría capitalista austriaca de la libertad soberana del consumidor en la satisfacción de sus necesidades insaciables. Tiene que cuestionar no sólo toda riqueza mafiosa sino toda riqueza no puesta al servicio del crecimiento del hombre, el único fin que debería contar. Porque aunque los bienes económicos (cosas y servicios) son valiosos, no lo son por ellos mismos. Su valor descansa en el que sirvan para el crecimiento de las personas.

En sexto lugar, nuestra reflexión tendría que dirigirse a desmontar de abajo a arriba la teoría de la seguridad nacional, que no pocas veces, con el pretexto de defensa de la civilización cristiana, repite hoy en día la inquisición desde el seno de nuestras Fuerzas Armadas. Este desmonte es un servicio que le debemos a la Iglesia, al cristianismo que vamos a legar a las generaciones que nos sigan, y al pueblo colombiano.

Muchos piensan que necesitamos un ejército para defender la soberanía nacional. Si ha de haber un ejército entre nosotros, que alega ser cristiano y católico y, a nombre de esos principios, miembros suyos de-

fienden intereses oscuros de políticos y hombres de negocios, reprimen la protesta popular, legitiman la tortura, dan soporte al MAS, hacen guerra de tierra arrasada y de éstas y otras maneras, a nombre del Dios de los cristianos, establecen el totalitarismo, nosotros, si es que el sentido de ese mismo Dios nos importa, tenemos que exigir la aclaración de las cosas y contribuir a que el mismo ejército se comprometa a fondo y coherentemente con el cristianismo que proclama cristianismo que es incompatible, con la ideología de la seguridad nacional.

En séptimo lugar, queda decir algo sobre el precio de la paz. La paz no es gratis. A sus costos, las reformas nunca hechas, se refirió aquí Juan Pablo II sorprendido sin duda de tantas manifestaciones de fervor religioso en medio de tanta violencia, que entre otras se profundizó después de la venida del Papa.

Los costos tenemos que asumirlos todos. Cada uno de nosotros personalmente, nuestras comunidades, esta Facultad, nuestros centros de reflexión y pastoral y luego todas las instituciones de este país que mal que bien hemos hecho entre todos.

Quizás hay aspectos que nos están reservados a nosotros los estudiosos de la tradición de fe porque tocan con la credibilidad de nuestro testimonio en períodos de angustia. La vida austera personal e institucional. La distancia de los negocios y de los capitales financieros. La sensibilidad a percibir todo aquello que pueda provocar, que

eleve el perfil violento de contextos proclives a la guerra, como los consumos suntuarios, las edificaciones de colegios y obras religiosas dotadas de todas las comodidades en ciudades fatigadas a muerte por la desigualdad; las relaciones incondicionales con los poderosos que merecen nuestra cercanía humana pero a quienes no podemos otorgarles hoy una relación sin cuestionamiento y exigencia de conversión social en un país que se deshace.

Conclusión

Para terminar estas consideraciones obviamente subjetivas, yo no puedo menos que evocar los tiempos de Jesús de Nazareth. La vida de Jesús y los tiempos cristológicos de las primeras comunidades cristianas que escribieron los Evangelios fueron tiempos de espantosa zozobra social. Basta un conocimiento elemental de la complejidad de las sociedades para percibir, en una lectura desprevenida del Nuevo Testamento, el contexto de violencia

en que se manifestó originalmente este mensaje, que nos atrajo a todos los aquí presentes desde niños, mensaje de la última significación de la persona humana, puesta como lo único definitivamente importante. Mensaje expresado en Jesús de Nazareth que se abre paso desde dentro pero para superar completamente la tradición institucional vetero-testamentaria, entre controversias religiosas que llevaron el debate hasta la sangre de los mártires, leyes que hicieron colapso, totalitarismo de poderes arbitrarios como bestias apocalípticas, y ricos que preparaban torres para amasar sus riquezas frente a la miseria de los otros.

Hoy estamos en otras épocas y todo es distinto pero, si tenemos una tarea peligrosa y difícil para hacer comprensiva la paz que no da el mundo, puede ser particularmente significativa una lectura de las bienaventuranzas, de la eucaristía y de la muerte de Jesús desde la hermenéutica de la encrucijada de violencias en que todo lo de Jesús aconteció.